

10. Los saqueos de diciembre de 2013 Violencia, protesta, desigualdad social

Sebastián Pereyra

Pablo Semán

INTRODUCCIÓN

Los saqueos a comercios y supermercados no son ajenos a la vida política de la Argentina. En las últimas décadas, además, pasaron a representar un rasgo saliente, una suerte de marca de las profundas crisis que atravesó el régimen democrático. Las imágenes de multitudes o de pequeños grupos entrando a los comercios y llevándose mercadería, o cometiendo diversos actos de vandalismo, evocan y hacen presente las dimensiones económicas y políticas de las dos grandes crisis del país: las de 1989 y 2001.

Que se hayan producido saqueos en aquellos contextos no implica, por decirlo de algún modo, ninguna anomalía. Si asumimos –como solemos hacer– esas crisis como catástrofes, podemos comprender que la violencia colectiva sobreviene en ese tipo de situaciones, que nuestras rutinas y modos de funcionamiento cotidiano se ven alterados, que las normas que regulan nuestras formas de interacción tienden a ser transgredidas. En 2013, sin embargo, los saqueos irrumpieron en la escena pública nacional por fuera del marco de una crisis institucional comparable a las mencionadas. Este capítulo tomará como foco de análisis los saqueos que tuvieron lugar a comienzos de diciembre de ese año en varias ciudades del país. A fin de ponerlos en perspectiva, los inscribiremos en un proceso político que nos retrotrae a la transición a la democracia y que nos obliga a contextualizarlos para comprender cada episodio en su especificidad.

El capítulo está estructurado en tres partes diferenciadas. La primera propone inscribir los episodios en una serie que los vincula con acontecimientos similares registrados durante las dos grandes crisis de la democracia argentina (1989 y 2001). Allí exploramos los diferentes modos de explicación acerca de los saqueos para identificar rasgos que suelen estar presentes en este tipo de hechos. En segundo lugar, presentamos datos de los casos de 2013, situados en el marco general de la protesta policial

que se desencadenó en varias provincias. Allí examinamos los distintos tipos de relación entre protesta policial y saqueos. Por último, nos centramos en los saqueos que se produjeron en la ciudad de Córdoba para buscar comprenderlos a la luz de algunos rasgos centrales de transformación de la estructura social argentina en las últimas décadas y, fundamentalmente, para analizar el lugar que adquirió el consumo como modo de definición de la ciudadanía y como criterio de distinción de clase.

LOS SAQUEOS Y LAS CRISIS: MODOS DE EXPLICACIÓN DE LOS SAQUEOS EN LA ERA DEMOCRÁTICA

En este último período de vida democrática en la Argentina se registraron, de forma esporádica pero recurrente, saqueos a comercios. Estos episodios se concentraron en los momentos en que el régimen de gobierno y el funcionamiento económico atravesaban crisis particularmente agudas. Los saqueos se constituyeron en un símbolo típico de la crisis hiperinflacionaria de 1989 y 1990 –con la que concluyó de modo anticipado el primer mandato de esta era democrática–¹ y en un elemento saliente de los sucesos de 2001–que pusieron fin a la presidencia de Fernando de la Rúa– y 2002 que marcaron una reorientación importante de la política económica.²

En el primer caso, dos olas de saqueos sacudieron el país. La más importante tuvo lugar entre mayo y julio de 1989, cuando se produjeron ataques a comercios en varias provincias, en un contexto de altísima inflación y pérdida del poder adquisitivo del salario, sumado a la reducción de la política asistencial en una situación de ajuste fiscal y crisis política desatada por la proximidad del cierre del mandato presidencial de Raúl Alfonsín. Durante los saqueos, que se concentraron en los principales centros urbanos, se produjeron violentos enfrentamientos que arrojaron un saldo de catorce muertos e implicaron la declaración del estado de sitio y la finalización anticipada del mandato presidencial. Al año siguiente, con una situación económica que continuaba deteriorándose, pero luego de la renovación política, en febrero se desató una segunda ola, concentrada en el Gran Buenos Aires, que tuvo una intensidad y una duración más acotadas.

Los saqueos de 2001 se realizaron durante la segunda mitad de diciembre, en particular los días previos y posteriores a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Estas acciones aparecen en una clara lí-

nea de continuidad con las concentraciones que, desde los últimos años de la década anterior, se habían producido frente a supermercados en distintas ciudades del país para reclamar la entrega de alimentos. Las organizaciones de desocupados impulsaron esta maniobra como parte de sus estrategias de confrontación para ampliar el repertorio de provisión de asistencia cuando las agencias estatales reducían sensiblemente la ayuda social.³ Los saqueos se produjeron en varias ciudades a partir del 10 de diciembre y se intensificaron durante el epicentro de la crisis política el 19 y 20 de diciembre, momento en el que terminaron por confundirse con las multitudinarias manifestaciones contra el gobierno y la multiplicación de escenarios de confrontación callejeros.⁴ Cesaron pocos días después de la renuncia presidencial y se concentraron en el Gran Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe. Casi el 60% de los episodios registrados por la prensa tuvieron como blanco pequeños y medianos comercios –y no los grandes supermercados–, y la presencia policial fue muy dispar.⁵

Desde entonces, los saqueos pasaron a formar parte de la vida política argentina: se manifiestan en las coyunturas de crisis, pero, además, permanecen como una amenaza latente en los momentos de inestabilidad política o de deterioro de la situación económica. En algunas interpretaciones prevalece la idea de que los saqueos representan una manifestación espontánea ligada al deterioro de las condiciones de vida de ciertos sectores de la población que, movidos por el hambre y la necesidad en circunstancias particularmente críticas, se ven empujados a las calles para proveerse de aquello a lo que no pueden acceder a través de sus ingresos; es decir, se los explica por la carencia y la pobreza.

Los datos estructurales de esas condiciones socioeconómicas alcanzarían para explicar episodios que pueden ser analizados como estallidos sociales.⁶ Alta inflación y merma en la política asistencial en un caso; desocupación, nuevas restricciones en el gasto social y crisis bancaria, en el segundo; los saqueos se producen cuando la acumulación de problemas acuciantes en los sectores populares traspasa cierto umbral de tolerancia.⁷

Otras lecturas, por su parte, se interesaron en una puesta en perspectiva de estos episodios en el marco de procesos de larga duración; es decir, corriendo el foco de los momentos de ruptura abrupta del orden social. Este tipo de enfoques trabajaron desde dos puntos de vista diferenciados. Por un lado, algunos textos analizaron los saqueos como el resultado y la manifestación de un tipo de articulación de redes locales que vinculan a vecinos, punteros políticos y policía en una escala local. Esas redes, que

operan cotidianamente, en particular, en los barrios populares del Gran Buenos Aires, tienen la capacidad de orientarse a la activación de este tipo de fenómenos que, lejos de explicarse por un carácter desesperado, espontáneo e incontrolable (violencia colectiva), se comprenden en virtud de su carácter organizado e incluso dirigido (hacia ciertas zonas, hacia cierto tipo de comercios, etc.).⁸ Volveremos sobre este aspecto.

Por el otro, los saqueos fueron entendidos como parte de un nuevo repertorio de acción colectiva de los sectores populares, cuyo origen se comprende a partir del proceso de transformación estructural que sufrieron desde la crisis del modelo de industrialización.⁹ Aquí los saqueos no representan ni una forma de estallido inorgánico ni, tampoco, la activación de cierto tipo de redes políticas que organizan la vida de los barrios populares, sino que expresan un modo de protesta y de reivindicación, junto con otras modalidades que surgieron y se consolidaron en las últimas décadas (ocupaciones, revueltas, piquetes). Los saqueos son, desde esta perspectiva, un modo de reclamo por condiciones de vida (necesidades básicas), que se explican en función de la centralidad que adquirieron estas reivindicaciones frente a las clásicas demandas vinculadas con el mundo del trabajo.

En esta última perspectiva, Merklen sitúa los saqueos como uno de los cuatro componentes que constituyen un nuevo repertorio de acción colectiva que se gestó al calor de las mutaciones estructurales de esta sociedad desde los años ochenta.

Desde hace más de veinte años, las clases populares argentinas elaboran nuevas formas de acción colectiva en respuesta a las profundas transformaciones que, desde lo alto de la sociedad, desestructuraron sus mundos de pertenencia. Ocupaciones ilegales de tierras, cortes de ruta, revueltas y saqueos a comercios y a hipermercados se encuentran entre las nuevas manifestaciones que progresivamente modificaron un “repertorio” clásico que giraba masivamente alrededor de los sindicatos y de los partidos.¹⁰

Los saqueos aparecen aquí como un elemento, entre otros, que configura la nueva realidad de los sectores populares en el contexto de la desestructuración del mundo del trabajo que había llevado a la Argentina, en la segunda mitad del siglo XX, a poner en marcha un modelo de sociedad salarial y de Estado benefactor. La transformación del país en una sociedad excluyente¹¹ produjo como efecto una territorialización de los sectores populares que perdieron, junto con el trabajo, uno de sus soportes colectivos

más importantes. Saquear, cortar rutas o tomar tierras son acciones que adquieren un sentido en virtud de una mutación global de la experiencia de estos sectores. No se trata de hechos aislados, sino del despliegue de un repertorio de acción que da cuenta de la nueva realidad del mundo popular. Estos componentes adquieren unidad en esa nueva inscripción territorial en la cual el trabajo deja de representar una vía de acceso al bienestar y la movilidad, y los mecanismos de representación, propios del mundo industrial –en especial, las organizaciones sindicales– no tienen capacidad para receptor y canalizar las nuevas demandas.

La inscripción territorial es, entonces, un punto en un proceso que comienza con la desafiliación del mundo del trabajo. La territorialización implica, por tanto, más que un criterio de reafiliación, una multiplicación de las afiliaciones a nivel local. Es decir, “funciona como un seguro social de múltiples dimensiones que permite a los individuos hacer frente a los riesgos de un presente permanente”.¹² De este modo, la territorialización va acompañada de la imposición de una “lógica de cazador” para la provisión y la satisfacción de necesidades.¹³ Deberíamos poder reconocer allí una nueva forma de solidaridad que implica una sociabilidad novedosa. El problema de la provisión de bienes y servicios aparece en el centro de los nuevos modos de vida de los sectores populares y ese problema se encuentra –podríamos afirmar– fuertemente marcado por la imposibilidad de proyectarse en el tiempo; la urgencia interviene aquí como un elemento que puede estar más o menos presente, pero que sin duda constituye un horizonte de expectativas.

Como sostiene Merklen, estas transformaciones estructurales involucran también una reorientación de la política pública hacia los sectores populares. El despliegue de la política asistencial o de lucha contra la pobreza fue cobrando fuerza desde los años ochenta hasta convertirse en el principal modo de articulación entre el Estado y los sectores populares. Así, las transferencias monetarias o la provisión de bienes se constituyeron en un aspecto central de la política social devenida ahora en política focalizada. La acción colectiva incorporó también este elemento de transformación ubicando, progresivamente, el reclamo asistencial en el centro de la escena y de la negociación. En este sentido, como sostiene Serulnikov:

El autocontrol del saqueo, lo abierto de las acciones colectivas y la expresión pública de los motivos de los saqueadores da a los disturbios por alimentos una dimensión social no reductible a la anomia o a la conducta desviada.¹⁴

El saqueo, entonces, es un modo de acción colectiva que exacerba la lógica del cazador en coyunturas críticas.¹⁵ La crisis marca un límite extremo a la posibilidad de continuar la difícil tarea de la provisión. Así, la carencia –o incluso el hambre como forma dramática de la carencia– es un componente central de los saqueos que, desde esta perspectiva, sin embargo, representan todavía un modo de acción colectiva. De este modo, se verifica una continuidad entre el saqueo y la protesta en muchas situaciones en las cuales la demanda de asistencia no interpela al Estado y se dirige directamente a los privados.¹⁶

Como dijimos antes, el otro abordaje de esta cuestión surgió como intento de analizar de forma específica la profusión de saqueos de 2001, desplazando la mirada de los acontecimientos y su contexto más inmediato a las condiciones sociopolíticas en que ocurrieron –y que, en algún sentido, los hicieron posibles–.

Las imágenes invitan a la moral y también apuntan a las formas de relación. Todas nos muestran diferentes clases de interacciones: entre saqueadores; entre saqueadores y saqueados; entre saqueadores y la policía; entre saqueadores, dueños de negocios y funcionarios. Sin embargo, la comprensión de todas estas interacciones no se va a encontrar dentro de esas imágenes. Tenemos que salirnos de ellas, por decirlo de alguna manera, para lograr una mejor visión de lo que está ocurriendo y de por qué la violencia se desarrolla de la manera en que lo hace.¹⁷

Desde este punto de vista, los saqueos se producen merced a la existencia de interacciones sostenidas en el tiempo entre vecinos, punteros políticos, autoridades y fuerzas de seguridad. Sobre la base de los intercambios previos es que puede concebirse una situación en la cual se producen saqueos a ciertos comercios, en algunos momentos particulares y con la intervención de algunos actores específicos. Los saqueos, como cualquier tipo de acción colectiva, requieren cierto tipo de organización, lo que no equivale a sostener que existen organizaciones dedicadas al saqueo, sino que son necesarias ciertas formas de interacción previas para que se produzcan en algunos momentos y lugares en particular.

Javier Auyero parte de esta constatación para analizar los saqueos de 2001 y concluir que existen dos elementos importantes que contradicen nuestras intuiciones sobre estos hechos en tanto respuestas violentas y espontáneas frente a la situación de carencia. Explica que para entender este tipo de fenómenos es necesario observar, por un lado, las bases re-

lacionales de los saqueos y, por el otro, la selectividad de las acciones de los saqueadores.¹⁸

Esos dos elementos permiten entender que, al menos en algunos contextos, las redes que vinculan a vecinos de barrios populares con dirigentes (punteros) o autoridades locales son una condición de posibilidad para la activación de los saqueos. Es inútil esencializar la figura de los saqueadores y otorgarle ciertas propiedades y atributos, sino que es necesario entender bajo qué condiciones de solidaridad política viven y cómo esos vínculos operan como mecanismos que los transportan en un momento dado a la situación de saqueo. La incitación –que dirigentes políticos han evocado con recurrencia en relación con estos episodios– es un tipo de acción que debe ser problematizada. ¿Bajo qué condiciones se puede incitar a determinada población para que saquee comercios? Esas condiciones no remiten sólo a las penurias económicas, sino también, y principalmente, a los vínculos de confianza y conocimiento previo que hacen que el llamado sea escuchado. Esto es, la incitación no puede ser pensada como un elemento externo a los lugares en los que se produce.¹⁹ El trabajo de Auyero muestra con la información disponible que, al menos en el caso del Gran Buenos Aires, los dirigentes políticos locales jugaron un rol de suma importancia en la propagación de los saqueos. Su papel, claro está, no se vinculó tanto con la participación como con la tarea de difundir los rumores de que se estaban produciendo olas generalizadas de saqueos en los barrios. También, asegurando los vínculos y volviendo predecible el comportamiento de otro actor clave en este escenario, la policía.

Dijimos antes que el segundo elemento necesario para comprender los saqueos se vincula con la selectividad. Por ejemplo, en el Gran Buenos Aires fueron mucho más numerosos que en la ciudad de Buenos Aires y los comercios pequeños y medianos se vieron más afectados que las grandes cadenas de supermercados. Estas diferencias se vinculan centralmente con la respuesta que las instituciones de seguridad tuvieron en aquellos días:

Numerosos informes coinciden en que la Policía Federal y las policías provinciales tuvieron particular cuidado cuando se trató de proteger los locales de Carrefour y Auchan, de propiedad francesa, y Norte, de propiedad estadounidense, a la vez que se creaban lo que activistas populares llaman “zonas liberadas” alrededor de los negocios pequeños y medianos, permitiendo que los punteros políticos y las multitudes se trasladaran libremente de un objetivo al otro.²⁰

Como resultado de este análisis los saqueos logran inscribirse como un tipo particular de episodio que forma parte de un proceso más complejo y de largo alcance como es el de la estructuración de la política de los sectores populares.

Como hemos visto hasta aquí, los saqueos se han constituido en rasgos salientes de las dos grandes crisis de la democracia argentina y han movilizad, en virtud de ello, diversos arsenales conceptuales que intentaron explicarlos. Sostuvimos también que, en los últimos años, sufrieron un desplazamiento notorio. En diciembre de 2013, en una coyuntura difícil para el país, pero alejada, sin duda, de aquellas crisis, los saqueos recorrieron nuevamente el país. Veremos a continuación algunos datos sobre esta nueva aparición.

INTERROGANTES SOBRE DICIEMBRE DE 2013: LOS SAQUEOS FUERA DE LAS CRISIS

A mediados de diciembre de 2013, la prensa nacional informaba el saldo de casi dos semanas de violencia en el país. Con epicentro en las provincias de Córdoba, Tucumán, Chaco, Jujuy, Entre Ríos y Buenos Aires, se habían registrado saqueos a comercios y disturbios en el marco de una serie de huelgas llevadas adelante por fuerzas policiales provinciales. Veamos brevemente la crónica de los principales episodios:

Entre noviembre y diciembre de 2013, policías y penitenciarios armados, con apoyo de personal retirado, de esposas y de familiares, protestaron en casi toda la Argentina con metodologías comunes y un uso intenso de las redes sociales. Esta sublevación/rebelión/alzamiento/protesta/asonada coincidió con desmanes, robos, incendios, toma de dependencias públicas a los tiros, cacerolazos, represión y muertes, entre otros hechos relacionados entre sí. Como parte del contexto, hubo una línea 0-800 habilitada para denunciar convocatorias a saqueos, y se viralizó un juego virtual para matar a saqueadores.

En este contexto se registraron, oficialmente, 146 hechos de saqueo/intento de saqueo (cada “hecho” puede incluir a numerosos comercios de una cuadra, con cientos de involucrados),

se produjeron alrededor de 800 detenciones, hubo 18 muertes y se abrió un tendal de causas judiciales, de distinto tenor, en distintas jurisdicciones, por distintos delitos.²¹

Diciembre es un mes conflictivo, y no tan sólo en virtud de los fantasmas de 2001. En diciembre de 2012, por ejemplo, se registraron episodios aislados de saqueos en Rosario, en Bariloche y en la provincia de Buenos Aires.²² Es un mes marcado por la proximidad de las fiestas de fin de año y los requerimientos de consumo que estas traen aparejados. Que se cumplan los plazos previstos para el pago de aguinaldos o la discusión sobre bonos también suelen avivarla actividad sindical.

En los últimos años, los aumentos de precios reactivaron y tensionaron los reclamos salariales²³ generalmente canalizados a través de las negociaciones colectivas. Ese mecanismo fue eficaz en los sectores con altos índices de empleo formal y con sindicatos fuertes, pero produjo situaciones conflictivas allí donde la sindicalización era más débil o inexistente. Este escenario llevó, por primera vez en muchos años, a la emergencia de conflictos salariales en las fuerzas de seguridad. En octubre de 2012, los efectivos de Prefectura salieron a la calle para reclamar por la reducción de salarios que trajo aparejada una reforma administrativa en la fuerza. A esta manifestación se sumaron agentes de Gendarmería, y la protesta se extendió con marchas y concentraciones en diversas provincias del país. En junio de 2013, la queja se reactivó con una multitudinaria marcha en la ciudad de Buenos Aires, encabezada por agentes que habían sido desplazados de la fuerza durante el conflicto del año anterior. El 14 de noviembre comenzó a gestarse un reclamo salarial en la policía de la provincia de Córdoba:

La faz preparatoria, de “concientización”, se inició el 14 de noviembre a través de mensajes por WhatsApp [...]. La campaña tuvo un efecto inmediato y generó un estado deliberativo en toda la Policía. Cuatro días después se puso en marcha el sincronizado plan, con la aparición de esposas frente a la Jefatura de Policía. La presencia de las mujeres se convirtió en una postal cotidiana y el lunes [2/12] irrumpieron en la Guardia de Infantería, sin permitir el ingreso o egreso de vehículos. Ese fue el comienzo de la huelga. Existía un acuerdo entre las manifestantes y los hombres de Infantería, que tenían la excusa perfecta para autoacuartelarse.²⁴

Mapa de protestas policiales y saqueos, diciembre de 2013



Fuente: *BA-datos*, disponible en <ba-datos.com.ar>, investigación de Josefina López Mac Kenzie; visualización de Cristian René Lora. Los colores oscuros señalan las provincias en las que se produjo la mayor cantidad de incidentes y se registró el número más alto de víctimas fatales.

El martes 3 de diciembre, se registraron saqueos en los barrios SEP e Ituzaingó de la capital provincial, que luego se replicaron en toda la ciudad durante el tiempo que duró el acuartelamiento provincial. La demora en el despliegue de fuerzas federales potenció el dramatismo de la situación provocada por los saqueos:

La ciudad de Córdoba se convirtió en un campo de batalla. Hordas de forajidos armados se trasladaban a los barrios de la ciudad para saquear cuanto negocio, supermercado o local tuvieran a mano. Los tiroteos se sucedían como si se viviera en el Lejano Oeste. La gente asistía azorada a un espectáculo que jamás hubiera imaginado. Ausente De la Sota, las autoridades provinciales desaparecieron literalmente y se produjo un impactante quiebre de la autoridad. Los vándalos hacían desastres. Algunos comerciantes repelían los ataques a los tiros.²⁵

Los hechos de Córdoba marcaron el inicio de un ciclo de protestas policiales en otras provincias, marco propicio para que se multiplicaran los rumores de saqueos y se concretaran varios en todo el país durante unos diez días. El mapa que se presenta a continuación muestra las provincias más afectadas.

La extensión de los saqueos –incluidas las amenazas y los intentos frustrados– fue muy amplia, aunque no generalizada, y siguió, en buena medida, el ritmo de las huelgas y los reclamos policiales. En ese punto, resulta importante revisar con más detalle la situación en cada uno de los distritos. Las tablas que se presentan a continuación ofrecen una descripción de los acontecimientos registrados en cada provincia, y sus consecuencias principales.²⁶

Protesta policial y saqueos, diciembre de 2013 (por regiones) NOA

Provincia	Lugar	Saqueos	Protesta policial	Consecuencias
Salta	Capital, localidades del Valle de Lerma, Orán, Tartagal, Mosconi y Aguaray	Sí	Protestas, acuartelamiento y paro (con participación de retirados y familiares).	152 detenidos y 17 heridos de bala
Jujuy	San Salvador, Perico y San Pedro	Sí	Protesta sin acuartelamiento ni abandono de tareas. Violencia en la sede de la gobernación.	1 muerto y 200 detenidos. 3 policías imputados por extorsión.
Tucumán	San Miguel	Sí	Concentraciones, acuartelamientos, liberación de zonas (bloqueo a la salida de móviles, anulación del sistema de denuncias 911, obligación a otros efectivos para que no presten servicios y se sumen a la protesta).	Se sumó un cacerolazo de vecinos reprimido por la policía y controlado por Gendarmería. 6 muertos, 35 detenidos y 47 imputados por sedición. Renunció el jefe de policía y se renovó la cúpula de la fuerza.

Catamarca	San Fernando	Sí	Manifestaciones, acuartelamiento, disparo con arma reglamentaria hacia el interior de la casa de gobierno (cruce entre policías y Gendarmería). También choque con empleados estatales que pedían aumento.	No hubo detenidos, ni imputados.
Santiago del Estero	-	No	No	-

Fuente: *BA-datos*, disponible en <ba-datos.com.ar>, investigación de Josefina López Mac Kenzie.

NEA

Provincia	Lugar	Saqueos	Protesta policial	Consecuencias
Formosa	Formosa y Clorinda	No	Notas, redes sociales, encadenamientos.	9 detenidos
Chaco	Resistencia, Roque Sáenz Peña, Charata, Villa Ángela y Quitilipi	Sí	Protesta con abandono de guardias, acuartelamiento y zonas liberadas.	5 muertos, 98 detenidos y 99 imputados por sedición.
Misiones	-	No	Hubo reclamo sin huelga.	-
Corrientes	Corrientes	Sí	Protestas sin acuartelamiento y prestando servicio.	-

Fuente: *BA-datos*, disponible en <ba-datos.com.ar>, investigación de Josefina López Mac Kenzie.

Nuevo Cuyo

Provincia	Lugar	Saqueos	Protesta policial	Consecuencias
La Rioja	La Rioja	No (desmanes)	Amenaza de acuartelamiento. Prestación de servicios mínimos.	-
San Juan	San Juan, Gran San Juan y Albardón	Sí	Concentraciones, panfletos, redes sociales.	Fue removida la cúpula policial. 100 detenidos.

Mendoza	Mendoza	No	Protesta sin acuartelamiento y prestando servicio.	Renuncia del ministro de Seguridad.
San Luis	San Luis y Mercedes	Intentos de saqueo	Manifestación y redes sociales.	11 detenidos.

Fuente: *BA-datos*, disponible en <ba-datos.com.ar>, investigación de Josefina López Mac Kenzie.

Patagonia

Provincia	Lugar	Saqueos	Protesta policial	Consecuencias
La Pampa	Santa Rosa	Sí	Acuartelamiento, movilizaciones, sms y redes sociales.	Heridos por balas de goma y gases lacrimógenos. 10 detenidos. 11 imputados por sedición.
Neuquén	Neuquén, Cutral Có, Junín de los Andes y Zapala	Sí	Acuartelamiento y concentraciones.	4 detenidos.
Río Negro	Cipolletti, General Roca, Bariloche y Viedma	Intentos de saqueo	Manifestaciones de retirados, activos y familiares, petitorio. Amenaza de acuartelamiento.	-
Chubut	Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn	No	Petitorios, redes sociales y acuartelamiento.	-
Santa Cruz	-	No	No	-
Tierra del Fuego	s/d	No	Carpa, fogatas y piquetes.	-

Fuente: *BA-datos*, disponible en <ba-datos.com.ar>, investigación de Josefina López Mac Kenzie.

Centro y Buenos Aires

Provincia	Lugar	Saqueos	Protesta Policial	Consecuencias
Santa Fe	Rosario y Gálvez	Sí (con desmanes)	Marchas, convocatorias, bloqueos, piquetes, redes sociales y liberación de zonas.	50 detenidos y 6 imputados por sedición.

Córdoba	Córdoba	Sí (con desmanes)	Acuartelamiento, liberación de zonas, marchas.	2 muertos. 100 heridos de bala. 170 detenidos 62 imputados por sedición.
Entre Ríos	Concordia, Gualeguaychú y Federación	Sí	Marchas, acuartelamiento, petitorios, tomas de comisarías y liberación de zonas.	3 muertos, 14 detenidos y 18 imputados por sedición.
Buenos Aires	La Plata, Conurbano Norte y Sur, Mar del Plata, San Nicolás y Necochea	Sí (desmanes)	Concentraciones, acuartelamiento, liberación de zonas	1 muerto (comerciante), 164 detenidos y 10 imputados por sedición.
Ciudad de Buenos Aires	-	Amenazas y rumores	No	-

Fuente: *BA-datos*, disponible en <ba-datos.com.ar>, investigación de Josefina López Mac Kenzie.

Las tablas precedentes muestran que, por un lado, la ola de saqueos no se extendió de modo generalizado a todas las provincias del país y, por otro, que la fuerte relación entre las protestas policiales y los saqueos no fue una constante, no se repitió en todos los lugares de igual manera. En 21 de los 24 distritos –las provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)– se registraron protestas policiales. Sólo en CABA, en Santa Cruz y en Santiago del Estero no hubo reclamos por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, únicamente en 13 distritos se produjeron saqueos. A ellos deberíamos agregar otros 4 en los que hubo rumores, amenazas o intentos de ataques (La Rioja, San Luis, Río Negro y CABA). Es decir, en 7 distritos no se produjeron saqueos, ni circularon rumores o amenazas (Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Mendoza, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), aunque en algunos sí hubo protestas policiales (Misiones, Mendoza, Chubut y Tierra del Fuego).

El siguiente cuadro ofrece un resumen de los cuatro tipos de situaciones en los 24 distritos en que se recabaron datos y el modo en que se distribuyeron. Analizamos, pues, la distribución de los distritos según el registro de saqueos y protestas policiales en cada uno.

Protestas policiales y saqueos, diciembre de 2013

		Protesta policial	
		Sí	No
Saqueos	Sí	13	0
	No	8	3

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del *BA-datos*, disponible en <ba-datos.com.ar>, investigación de Josefina López Mac Kenzie. Intentos y rumores de saqueos se contabilizaron de forma negativa.

Si descartamos los tres distritos en los que, efectivamente, no se registraron ni incidentes ni protestas, podemos observar que la protesta policial tuvo una fuerte repercusión en los saqueos, si bien no fue un factor por completo determinante. Para arrojar más claridad sobre esta cuestión, es necesario establecer algunas distinciones y matices en las dicotomías que planteamos más arriba.

En primer lugar, cuando se observa con cierto detalle la situación de cada uno de los distritos, queda claro que, de modo estricto, hubo al menos dos tipos distintos de situación conflictiva entre gobiernos y fuerzas de seguridad. Casos como los de Córdoba, Tucumán, Chaco, Salta o Catamarca²⁷ implicaron conflictos policiales que incluyeron modalidades disruptivas de protesta. Se trata de provincias en las cuales la policía llevó adelante diferentes modalidades de huelga, acuartelamiento, abandono de tareas y marchas. En ese aspecto, difieren los casos de Corrientes, Formosa, Mendoza, Chubut o Tierra del Fuego, donde las protestas se limitaron a la presentación de petitorios o a la difusión de consignas por redes sociales. Entre ambas modalidades, en muchas provincias (Santa Fe, San Juan, San Luis o Río Negro) se produjeron marchas o concentraciones con un nivel mayor o menor de perturbación en la realización de tareas (y en particular de aquellas ligadas al patrullaje o la prevención de delitos en la vía pública). En ese sentido, el registro de los acontecimientos marca que la protesta policial incluyó en algunos casos, de modo más o menos velado, la liberación de zonas para la comisión de delitos contra la propiedad. En muchos distritos, dejar expresamente sin protección algunas zonas comerciales representó un formato, entre otros, de la actividad de protesta policial.

En segundo lugar, los incidentes que se registraron en algunas ciudades fueron de alcance e intensidad variables. Cabría distinguir aquí, entonces, dos situaciones bien distintas: por un lado, casos como los de Córdoba, Tucumán, Chaco, Salta o Jujuy, en los cuales se registraron saqueos masivos a comercios en diferentes zonas de la capital o de otras ciudades y que incluyeron episodios de enfrentamiento abierto entre ve-

cinos, además de movilizaciones de reclamos contra las autoridades. Por otro lado, en CABA,²⁸ en Río Negro o en San Luis, circularon rumores de saqueos o se produjeron concentraciones frente a comercios para exigir mercadería, pero sin que finalmente llegara a producirse una ola de saqueos como en los casos antes mencionados. Entre ambos tipos podemos encontrar otros tantos episodios en los que se registraron roturas de vidrieras o acciones de intimidación por parte de bandas que circularon durante algunas horas por las calles.

Incluidos estos matices, podemos ver que en aquellos distritos en que hubo huelgas policiales más severas se desencadenaron los ataques más importantes. Sin embargo, algunos casos son reveladores para dar cuenta de la ausencia de saqueos en lugares en los que también se llevaron adelante protestas policiales. En Formosa o Misiones, donde el reclamo policial se limitó a la presentación de notas o a la difusión de consignas, no hubo inconvenientes. Sin duda, esto se vincula con el hecho de que no se alteraron los modos corrientes de funcionamiento de las policías provinciales. Sin embargo, en provincias como Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego o San Luis, los conflictos fueron bastante intensos, incluyeron manifestaciones, acampes o acuartelamiento sin que ello diera inicio a una ola de saqueos, ni siquiera a episodios aislados. Por último, debemos señalar que en Jujuy, Corrientes, Santa Fe, La Pampa o Buenos Aires, donde los conflictos no llegaron a registrar huelgas policiales declaradas de manera oficial, sin embargo, se registraron saqueos y desmanes en las principales ciudades de esos distritos.²⁹

En definitiva, el escenario de diciembre de 2013 vincula de modo claro los saqueos con las protestas policiales. Sin embargo, la variedad de situaciones registradas a lo largo del país durante el conflicto –y la amenaza de la propagación de los ataques– vuelven legítimo el interrogante sobre qué otros elementos estuvieron presentes allí donde se desataron olas de saqueos de proporciones muy significativas. Para abordar esta última cuestión, recurriremos a un análisis pormenorizado de los acontecimientos que tuvieron lugar en la ciudad de Córdoba. Nos focalizaremos en los hechos que se desencadenaron allí durante los días de la huelga e intentaremos ponerlos en perspectiva, situarlos a través de una mirada atenta sobre las condiciones de vida, la organización del espacio, los modos de consumo presentes en las poblaciones y los barrios que fueron epicentro de los saqueos.

CÓRDOBA Y LOS ABISMOS DE LA DESIGUALDAD

Los hechos ocurridos en Córdoba ofrecieron una composición específica derivada de la convergencia de dos procesos cuya combinación tiene características explosivas. Transformaciones sociales y económicas de largo plazo y sus derivaciones en términos de segregación social y territorial de un lado, y de otro, la evolución de la institución policial y sus prácticas en relación con los fenómenos antedichos y el despliegue del narcotráfico. En el encuentro, necesario además, de las líneas de despliegue de estos procesos se conforman el escenario y los determinantes de un conjunto de sucesos que implicaron, entre otros, la rebelión policial, las manifestaciones criminales de ataque a los comercios y las no menos criminales tentativas de justicia sumaria, por mano propia y basada en preconceptos.

TRANSFORMACIÓN URBANA Y SEGREGACIÓN TERRITORIAL EN CÓRDOBA

Partamos de un hecho: Córdoba no ha sido una excepción a los efectos del funcionamiento de la economía que se tradujo en niveles de desigualdad y empobrecimiento de la población que tuvieron su pico en 2001. Si bien puede señalarse cierta recuperación, persisten remanentes que, a su vez, sedimentan sobre procesos de desigualdad y pauperización anteriores, en una dinámica que lleva al menos cuarenta años. En ese contexto, los analistas han discernido procesos de transformación urbana que implican la instalación de importantes grados importantes de segregación residencial en las décadas recientes.

En un trabajo destinado a analizar cuantitativamente las tendencias de la segregación residencial socioeconómica en la ciudad de Córdoba entre 1991 y 2008, Florencia Molinatti muestra cómo se expresa esa segregación en el espacio urbano.³⁰ Según esta autora, Córdoba vive dos tipos de transformaciones de largo y mediano plazo: la desaceleración del crecimiento de la población y las transformaciones en los modos de estructuración del territorio, “manifiestos en los nuevos patrones de localización de las actividades residenciales y comerciales”. Según Cecilia Marengo, quien estudia las intervenciones urbanas en los bordes de la ciudad, es posible comprobar que

En la última década del siglo XX en la ciudad de Córdoba, se asiste a un proceso de expansión suburbana que se produce conjuntamente con la reestructuración del espacio metropoli-

tano, la concentración económica y la localización selectiva de nuevas inversiones privadas fundamentalmente en la periferia urbana.³¹

Este conjunto tiene dos aspectos contrapuestos: de un lado, incluye diversas formas de urbanizaciones cerradas (*countries*, barrios cerrados, condominios de lujo) –que, según la municipalidad de Córdoba,³² constituyen casi el 10% de las nuevas urbanizaciones– y, de otro, acciones gubernamentales que implicaron desplazar o localizar a la población de bajos ingresos en la periferia de la ciudad a través de un programa que construyó, desde 2003, las “Ciudades Barrio”. En el análisis que efectúa Molinatti de la información ofrecida por la municipalidad, las intervenciones estatales representan casi el 17% de las 447 nuevas urbanizaciones tramitadas entre 1985 y 2008. A esto debería agregarse la fuerte inversión inmobiliaria desde hace unas dos décadas en barrios como Nueva Córdoba, cercanos al centro de la ciudad, y también a la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. En este contexto, en que la segregación residencial es entendida como una forma de apropiación del territorio que implica la constitución de aglomerados urbanos con altos grados de endogamia social, sea esta étnica, etaria, religiosa o socioeconómica, el análisis de la localización espacial de los jefes de hogar según su nivel educativo, así como de los indicadores de concentración espacial, concluye que “la ciudad de Córdoba se encuentra altamente segregada en términos socioeconómicos” de forma tal que “los jefes [de hogar] con educación baja y media-baja tienden a concentrarse en el Sur, el Este y el Norte de la ciudad, conformando áreas con ‘segregación por pobreza’ y los jefes con educación media-alta y alta ocupan predominantemente la zona central y el corredor Noroeste, constituyendo zonas caracterizadas por una ‘segregación por riqueza’”.³³

Habida cuenta de que, como lo describiremos más adelante, entre las situaciones que atizan el conflicto social en Córdoba se encuentra la tensión entre la policía y los jóvenes de sectores populares que habitan en la periferia, merece una consideración específica el caso de las acciones gubernamentales que produjeron la relocalización de familias de los sectores populares y la redefinición de la propia periferia. El programa “Mi Casa Mi Vida”, que es un vector paradigmático de este proceso, comenzó amparado en la declaración de emergencia hídrica que desde 2001, y con la intención de mejorar la infraestructura habitacional de barrios y grupos vulnerables afectados por las inundaciones, promovió el desplazamiento de población que estaba en áreas centrales o

cercanas al centro, hacia emplazamientos que en caso de tener más de 250 viviendas recibirían el nombre de “Ciudades Barrio” y dispondrían, en teoría, de servicios educativos, sanitarios, de recreación y de seguridad en la propia comunidad. Buena parte de las relocalizaciones que entre 2001 y 2007 abarcaron 35 villas de emergencia sobre un total de 158 que existían en 2001, se realizaron de modo conflictivo y violento, muchas veces en camiones del Ejército y con la inmediata demolición de las viviendas para evitar el repoblamiento de las villas de origen de los trasladados. Marianne Von Lücken describe esta dinámica para un caso específico del programa: la relocalización de villa La Maternidad en “Ciudad de mis Sueños”.³⁴ Las relocalizaciones implicaron la ruptura y recomposición de las tramas organizativas de las villas de origen así como la integración de pobladores provenientes de regiones rurales de la provincia: de una manera o de otra, la relocalización implicaba la pérdida de referentes cruciales para estructurar las oportunidades de vida de los pobladores. Una de las características de los barrios emergentes de esta política es su emplazamiento en la periferia de la ciudad, en zonas semirurales, con límites trazados por alambres perimetrales y a una gran distancia del centro de la ciudad o de las áreas productivas en las que, regularmente, se emplean los trabajadores. Esta cualidad se une a otra que amplía la repercusión negativa en cuanto a la situación de empleo: un sistema de transporte público de muy baja calidad, con escasa frecuencia, alto costo y larga duración de viajes, que casi siempre incluyen transbordos y, por lo tanto, resulta muy caro para las poblaciones de bajos ingresos. Como podría esperarse, las infraestructuras de servicios de los nuevos barrios no han sido suficientes, lo que ocasionó que se tornen más precarias aún las condiciones materiales de existencia de los ciudadanos relocalizados. En ese contexto, la distancia implica empobrecimiento; los habitantes de las ciudades barrios se ven obligados a aceptar servicios de peor calidad que los que disfrutaban en sus localizaciones originarias.

En este panorama, más allá de las urbanizaciones realizadas en barrios cerrados, llama la atención lo que sucede en Nueva Córdoba, barrio emblemático de los beneficios del “boom de la soja” que refleja, de forma más abierta que los *countries*, la emergencia de grupos sociales con patrones de consumo que para la Argentina pueden ser considerados altos. En cada manzana de las zonas más ricas del barrio hay verdulerías decoradas al modo de Nueva York, vinerías que exhiben un listado que supera en calidad y precio el de los supermercados, panaderías y reposterías de calidad superior a la media y fotocopiadoras espe-

cializadas en trabajos técnicos que permiten atender con comodidad y sin pérdidas de tiempo a los numerosos estudiantes que requieren sus servicios. Insistimos: en cada manzana hay uno de cada tipo mencionado, lo que produce una verdadera saturación del espacio, además de una casa de ropa de marcas personalizadas y locales nocturnos para la diversión de miles de jóvenes que vienen a estudiar desde las prósperas localidades vinculadas a la expansión del agronegocio. Todo esto, que puede parecer una descripción asombrada con lo que sería propio de las clases medias, aparece como un mar de prosperidad ante los vastos sectores con ingresos bajos, empleos informales, inserciones intermitentes en el mercado y una historia de décadas de empobrecimiento. Todo para una población de estudiantes que no gasta menos de 20 000 pesos mensuales y viaja habitualmente a los Estados Unidos, Europa y el Caribe. No todos los habitantes de Nueva Córdoba viven así, pero mucha gente sí. En esa Nueva Córdoba, los “negros” casi no tienen lugar: ni como dependientes de almacén, ni como repositorios, ni como asistentes de limpieza. Hasta para esos “puestos viles” predominan los hijos de colonos gringos más pobres, pero “blancos”. La de los “negros” es una presencia rara, que no amenaza porque, se sabe, está la policía que mira, detiene, expulsa al “invasor”. La policía garantizaba ese orden y, en gran medida, parasitaba de otro próspero negocio: el tráfico de drogas. He ahí, junto con la desigualdad territorialmente inscripta y producida, el otro gran factor que permite dar a los sucesos si no una explicación, un marco de inteligibilidad.

LAS FUERZAS POLICIALES: EL CONTROL Y EL DESCONTROL DEL TERRITORIO

La policía reestructurada, fortalecida presupuestaria y operativamente, fue puesta al control de una población relocalizada y, en consecuencia, por las características del proceso de traslado, privada de la presencia de organizaciones estatales y sociales, lo que la transformó en una curiosa mano izquierda del Estado: de la propia organización que produce el control represivo surgían referencias para la articulación social. Esta organización policial es, a la vez, la que reprime a los jóvenes de las periferias y la que se engarza a las redes del narcotráfico y compromete, en ese ensamble, a su propia cúpula.

La política de seguridad implementada por el gobierno de Córdoba tiene al menos dos puntos de contacto con el estallido de 2013. De un lado, la operación de un mecanismo de control y exclusión social que

trabaja insidiosamente sobre los jóvenes pobres de las periferias.³⁵ De otro, la creación de vínculos con el narcotráfico, ligados de un modo contradictorio y conflictivo a la vida interna de las fuerzas policiales.

Casi al mismo tiempo que comenzaron las relocalizaciones, la política de seguridad fue objeto de una transformación notable en la provincia, de acuerdo al informe realizado por Brocca, Morales, Plaza y Crisafulli.³⁶ Durante el segundo mandato de De la Sota (2003-2007), se creó el Ministerio de Seguridad, además de un nuevo cuerpo de policía (el Comando de Acción Preventiva), y se sancionaron leyes que endurecieron el control y las penas así como acentuaron la autonomía de los poderes provinciales en políticas de seguridad, en el marco de la agitación general derivada de la crisis de 2001 y de la ola de demandas que impulsó el desarrollo del caso Blumberg. Entre las características centrales de esta política está el hecho de que la conducción del ministerio fue delegada a personal policial promocionado dentro de una institución que no revisó su actuación durante el período de la última dictadura.³⁷ Además, fue notable el incremento del presupuesto destinado a la compra de equipamientos e incorporación de efectivos, que pasaron de 13 500 en 2007 a 20 000 en 2011. Esto último se produjo en el contexto de un régimen de trabajo que no sólo era precario porque el logro de una remuneración aceptable dependía de horas adicionales decididas de manera arbitraria por los superiores, sino también porque las condiciones de ejercicio del cargo exigían mantener el estado policial a tiempo completo (lo que generó, en los escalones más bajos de la fuerza, niveles altos de sobrecarga y riesgo).

Las trayectorias de las intervenciones urbanas antes citadas y la transformación de las políticas de seguridad tienen su punto de intersección en el Código de faltas que impone controles y demoras en la vía pública, así como detenciones en general arbitrarias e injustificadas, que son el motivo de exacciones ilegales, apremios e incluso disparos y muertes. El ejercicio de los controles contravencionales, por lo común faltas menores, se guía tanto por el subjetivo –pero sistemáticamente clasista– “olfato policial” como por la necesidad de generar datos estadísticos que muestren la actividad y eficacia del servicio; esta tónica de trabajo es, además, impuesta a los agentes de menor rango bajo la presión de recibir sanciones disciplinarias y que se corten los servicios adicionales, que tan importante papel cumplen en su remuneración final. Esto no implica dejar de considerar otras acciones controversiales y rayanas en la ilegalidad, como los allanamientos masivos, el reclutamiento de jóvenes a favor de redes delictivas y la represión ejercida a distancia de los protocolos definidos

por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco de una política destinada a revertir los efectos del abuso en el uso de la fuerza en las instituciones de seguridad. El Código de faltas fue sancionado en la década de 1990, pero su vigilancia se volvió más intensa con la transformación de la policía y la ampliación de su capacidad de control territorial, y con la retención de la facultad de instruir y juzgar a los contraventores en relación con figuras delictivas ambiguas como el “merodeo”, la “prostitución molesta”, o los “actos contra la decencia”. Estas detenciones tienen duraciones tanto más extensas cuanto más bajo es el nivel socioeconómico de los detenidos, y se plasman en condenas de hasta seis meses de establecidas, muchas veces, con la prescindencia práctica y legal de un defensor. En este contexto de autonomización y ausencia de controles sobre la institución policial, las detenciones realizadas en la ciudad de Córdoba pasaron de 5021 en 2004 a 42 700 en 2011.³⁸

Si todo esto es parte de los factores que contribuyeron al ánimo incendiario de aquellos días de diciembre de 2013, no debemos dejar de atender a factores que obraron de manera más intencionada y singular y que están ligados al segundo aspecto de la evolución de las fuerzas policiales: su compromiso con el narcotráfico y sus intereses específicos volcados en la producción de los desórdenes que aquí analizamos.

Independientemente del grado de veracidad de las versiones que aseguran que de 2003 a 2013 se hizo visible un creciente compromiso de la policía con el narcotráfico, tanto en la protección como en la explotación directa de la actividad, lo cierto es que, hacia fines de 2013, una parte de la cúpula policial dedicada a la persecución del tráfico de drogas peligrosas se vio desplazada, acusada por sus lazos con el delito que debía combatir. Llegados a ese punto, en el marco de una situación en la que varios agentes cayeron de forma extraña en comportamientos suicidas, crecen las sospechas acerca de algo que se decía entre murmullos: que las fuerzas policiales, en una cadena que beneficiaba más a los de más alta graduación, participaba económicamente de esta actividad. Beneficio económico que en muchos casos no hacía sino compensar las exigencias mencionadas antes y las bajas remuneraciones percibidas. En ese escenario en que la cúpula policial caía –y lo hacían también los ingresos derivados del narcotráfico–, surgieron, unos meses antes de los disturbios, movimientos de reclamo anónimo y clandestino de algunos sectores de la policía que exigían aumentos salariales, un bono de fin de año y la recuperación de la imagen de la fuerza. Ya en noviembre de aquel año, en un grupo de *Facebook*, los familiares de los efectivos respaldaban sus reclamos y

las acciones que se promovían más secretamente a través de mensajes de texto, mientras las autoridades políticas de la provincia parecían no advertir el peligro inminente.

Los reclamos llegaron a los jefes de la fuerza que el 1 de diciembre los rechazaron, para luego dar concesiones parciales el segundo día del mes, aunque sin aval de las autoridades provinciales y en grados que los subordinados –que ya apostaban al autoacuartelamiento– rechazaron. Al mismo tiempo que comenzó el acuartelamiento policial, los jóvenes de los barrios populares recibieron, como un estímulo la información que algunos miembros de la policía les transmitían acerca de que la noche del 3 de diciembre la ciudad estaría liberada. Desde antes de la madrugada de ese día, el caos estaba garantizado: hubo facilitadores de las rupturas iniciales de vidrieras que incentivaron al saqueo de comercios e incluso organizaciones que se dividían las tareas de entrar a los comercios, salir con los productos y entregarlos a quienes luego los transportaban. No faltaron quienes, al ver la oportunidad, robaron al vecino, y tampoco, por supuesto, escasearon las reprimendas brutales, desproporcionadas y muchas veces ejercidas contra transeúntes que no tenían ninguna relación con hechos violentos, pero portaban sí los rasgos de la pobreza entendida como criminalidad efectiva. De este modo, a los saqueos inducidos y a los que resultaron de la percepción oportunista de la anarquía, se sumaron las descargas de violencia racista legitimada y potenciada por años de segregación territorial.

CONCLUSIONES: LOS SAQUEOS Y LA DESIGUALDAD

Los saqueos de diciembre de 2013 representan una novedad en el paisaje social y político de la Argentina. Como dijimos, se trata de una ola de ataques registrados en distintas ciudades del país y que no se ubican en una coyuntura de abierta crisis económica o política.

Hemos observado en estas páginas que los análisis sobre los episodios ocurridos durante las crisis de la democracia argentina en 1989 y 2001 nos brindan herramientas importantes para entender y poner en perspectiva este tipo de fenómenos. Encontramos allí un modo de pensar los saqueos menos como una respuesta violenta e irracional frente a la situación de carencia y más como un rasgo saliente de la experiencia estructural y política de los sectores populares de nuestro país.

Siguiendo esa línea, revisamos los argumentos que sostienen que los saqueos forman parte de la experiencia tanto de desafiliación social como de socialización política de los sectores populares. Encontramos elementos que los vuelven comprensibles en relación con las condiciones de vida y los desafíos cotidianos que deben afrontar los habitantes de barrios populares como y también respecto de las redes e interacciones que los vinculan con dirigentes políticos y funcionarios policiales. Los saqueos, por atípicos, no deberían ser pensados ni como un elemento excepcional ni como un fenómeno inexplicable.

En 2013, los saqueos convivieron con la extendida huelga policial que se desató en varias provincias argentinas. Con los datos disponibles, pudimos trazar un mapa de los vínculos entre la protesta policial y los episodios de saqueos. Ese mapa nos permitió observar que, por un lado, la protesta policial fue un elemento central en los saqueos de diciembre, pero, por otro, que no fue un factor exclusivo –ni decisivo– para que tuvieran lugar los hechos tal y como ocurrieron. En ese sentido, la inacción u omisión policial parece ser una causa necesaria pero no suficiente para que se produjeran. La huelga policial tuvo un alcance, generalizado. Aun donde no hubo medidas de fuerza ni acciones de protesta, prosperó un estado deliberativo y la expresión del malestar y el conflicto con el poder político. De todos modos, el efecto de los planteos policiales no se distribuyó de modo homogéneo en todo el territorio y generó situaciones muy diversas. En muchas ciudades, los rumores y la intranquilidad acompañaron los días álgidos del conflicto; en otras, se desencadenaron violentos episodios de saqueo y confrontación.

Nuestro trabajo afrontó esta diversidad focalizando en un caso específico y tratando de observar qué rasgos y particularidades operaron en esa situación. Es así que nos trasladamos del mapa general al escenario de la confrontación en la ciudad de Córdoba en los primeros días de diciembre de 2013. En el detalle de esos acontecimientos pudimos observar dos elementos que nos parecen significativos. El primero, que la escena de la confrontación estaba marcada por fuertes contrastes de desigualdad social, reflejados por una marcada segregación espacial.³⁹ El segundo, que los contrastes aparecen directa y sensiblemente regulados por la presencia policial como garantía de control de que los espacios reservados a cada grupo socioeconómico no sean violados ni alterados.

Podemos sostener, entonces, que un elemento central que opera en los acontecimientos estudiados se vincula de manera directa con la desigualdad. El escenario donde transcurren los hechos está moldeado por la desigualdad. Es más, el escenario cordobés parece reflejar de forma

explícita las tendencias contrapuestas en materia de desigualdad que marcaron la dinámica de los últimos años del país.⁴⁰

El escenario muestra, en efecto, lo que Kessler identifica en términos de una pluralización y un desanclaje de las esferas de la desigualdad. Así, aspectos relacionados con las condiciones de vida constituyen rasgos de la desigualdad que se autonomizan de las dimensiones clásicas del empleo y los ingresos. El hábitat define, en nuestro caso, una nueva constelación de desigualdades que se organizan a partir de la segregación espacial. Como dijimos, la segregación condensa y refuerza aspectos de la desigualdad, fundamentalmente ligados a los servicios y al consumo. El control policial de esos límites espaciales resulta entonces un elemento fundamental de esa configuración. En ese sentido, podemos sostener como conclusión general que los saqueos se producen allí donde se aflojan los lazos de control social, pero también donde las desigualdades coexisten en espacios urbanos acotados y tienen marcas de diferenciación fuertes ligadas a la segregación espacial.